



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: SOL EUGENIA CORRALES CAMPUZANO  
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -  
COLPENSIONES; y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE  
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 016 2019 00158 01  
Sentencia: 065

## **DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la ACP COLPENSIONES, en contra del auto proferido el día 19 de septiembre de 2020 por el Juez 16 Laboral del Circuito de Medellín.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

Se hace constar que mediante auto del 14 de septiembre del presente año, se aceptó el impedimento declarado por el Magistrado JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ (f. 177 y 178) y en su

reemplazo se llamó a integrar la Sala a quien le sigue en turno, Dr. HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ.

### **A N T E C E D E N T E S:**

En el proceso de la referencia, mediante auto del 19 de septiembre de 2019, encontrándose en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 11 de la ley 1149 de 2009, concretamente en la etapa de conciliación, el Juez de primera instancia dispuso aceptar una conciliación entre la parte demandante y la AFP PROTECCIÓN S.A., disponiendo en consecuencia el traslado de la señora SOL EUGENIA CORRALES CAMPUZANO a COLPENSIONES, junto con la devolución de todos los recursos de su cuenta de ahorro individual, incluyendo todo lo recibido con motivo de la afiliación.

Ordenó además a la ACP COLPENSIONES reactivar la afiliación y declaró terminado el proceso sin imponer costas a ninguna de las demandadas.

Inconforme con la anterior decisión y ante la inasistencia a la audiencia por incapacidad médica concedida por la EPS SURA, la apoderada de COLPENSIONES propuso incidente de nulidad teniendo en cuenta que no participó en esa conciliación, más aún cuando al despacho se había allegado el acta de comité de la entidad en el que se informaba acerca de su postura de no conciliar dentro del proceso, vulnerando de ésta manera su derecho de defensa.

Solicitud que es coadyuvada por el señor Procurador Judicial para asuntos laborales según comunicación del 28 de noviembre de 2019, fls. 169 y 170, quien advierte que se presenta una nulidad constitucional con base en lo establecido en el artículo 29 de la Carta Política al haberse celebrado una conciliación sin la comparecencia y aceptación de una de las partes como lo es COLPENSIONES, frente a

quien la decisión final va a implicar una serie de efectos cuya única forma de ordenarse es mediante sentencia judicial.

Ambas solicitudes fueron negadas por el funcionario a quo mediante auto del 28 de enero de 2020, al considerar que no era necesaria la participación de COLPENSIONES en esa conciliación, no solo porque las causales de nulidad son taxativas, sino también porque de todas formas esa entidad no hizo parte en el acto jurídico demandado.

Decisión cuestionada por el apoderado de COLPENSIONES a través del recurso de apelación en el que se insiste en la nulidad alegada ya que como parte que es dentro del proceso, debe manifestar su aceptación frente a esa conciliación para que la misma pueda ser aprobada.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término del traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, el apoderado de la demandante señala que como esa conciliación quedó en firme, se solicitaron copias auténticas y se presentaron tanto en COLPENSIONES como en PROTECCIÓN S.A. y ambas entidades dieron cumplimiento a la conciliación. Por un lado, PROTECCIÓN S.A. trasladó todos los aportes y gastos de administración; y por el otro, COLPENSIONES anuló el traslado y hoy la tiene como válidamente afiliada al RPM, pues recibió todos los aportes e incluyó en la historia laboral todo el tiempo que cotizó en el RAIS. Por ese motivo solicita confirmar el auto del juez de primer grado en la cual no declaró la nulidad de la conciliación.

COLPENSIONES a su turno, insiste en la declaratoria de nulidad de la conciliación efectuada el 19 de septiembre de 2019 debido a que en momento alguno ha manifestado esa intención y así se desprende de la Certificación No. 177562019 de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 27 de junio de 2019, misma que

fue allegada al proceso, incluso, antes de la celebración de la audiencia. Sostiene en tal dirección, que en los procesos en los que se pretende la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, se encuentra una excepción al efecto relativo de los contratos, porque, aun cuando el acto jurídico del traslado de régimen pensional se perfecciona entre el afiliado y uno de los fondos privados, los efectos de la ineficacia del negocio jurídico impacta a un tercero como es el caso de COLPENSIONES. Indica además que siendo la conciliación un mecanismo en el que impera la voluntad de las partes, no es posible dar por terminado un proceso cuando uno de los integrantes del extremo pasivo ha manifestado su voluntad de no conciliar. Para finalizar, cita el tercer inciso del artículo 312 de CGP, según el cual, si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción.

### **CONSIDERACIONES:**

En el presente caso, la cuestión se centra en determinar si debe declararse la nulidad de lo actuado tal y como lo pretende la codemandada (COLPENSIONES), ordenando continuar con el trámite del proceso desde su etapa de conciliación, o si, por el contrario, debe terminarse el proceso tal y como fue ordenado por el Juez de primera instancia al aceptar la conciliación celebrada entre la parte demandante y la otra entidad codemandada - PROTECCIÓN S.A. -

Lo primero que se debe advertir, es que con motivo de la información suministrada por la parte actora en cuanto a que las entidades dieron cumplimiento a la obligación, se dispuso, mediante auto del 15 de diciembre de 2020, requerir tanto a COLPENSIONES como a PROTECCIÓN S.A., para que informaran si ciertamente habían

procedido a dar cumplimiento a lo dispuesto en la conciliación celebrada aquel 19 de septiembre de 2019.

Requerimiento al que ambas entidades dieron cumplimiento en los siguientes términos:

En primer lugar, COLPENSIONES informó, a través de su Dirección de Afiliaciones, que *“Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a SOL EUGENIA CORRALES CAMPUZANO, identificado/a con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 43432428, se encuentra afiliado/a desde el 02/10/1995 al Régimen de Prima Media con Prestación Definida...”*, certificación que fuera expedida el 27 de enero de 2021.

Adicionalmente, mediante comunicación del 28 de enero de 2021, la Directora de Ingresos por Aportes de la Gerencia de Financiamiento e inversiones de esa entidad, informa acerca de la continuidad en el registro de afiliación de la demandante a esa entidad por *“Anulación Traslado...”*, agregando que *“... la AFP PROTECCIÓN identificó mediante el aludido Sistema de Información de los Afiliados a los Fondos de Pensiones (SIAFP), el archivo de actualización PRCPAAT20200415.r016 de fecha 07 de mayo del 2020 **acreditando la devolución de aportes** pensionales para los ciclos comprendidos entre 1995/10 y 2020/07 cotizados durante la permanencia del afiliado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS”*.

Además, se adjunta copia de la historia laboral de la demandante que da cuenta de la inclusión de todos aquellos aportes que habían sido realizados al RAIS en los que consta la siguiente observación: *“Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado”*.

Por su parte, PROTECCIÓN S.A. responde el requerimiento del despacho informando que *“... ya realizó la anulación de la afiliación de la señora Sol Eugenia Corrales Campuzano al RAIS **y trasladó todos sus***

**aportes a Colpensiones”** lo que acredita con un pantallazo de su sistema de información.

No obstante lo anterior, el hecho de que se hubiera informado de distintas maneras sobre el cumplimiento a la obligación, no significa que se deban desconocer las garantías constitucionales que tienen las partes dentro del trámite del proceso, más aún cuando no resulta del todo claro si esa devolución de aportes que se menciona, incluyó únicamente el saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante y sus rendimientos financieros, o si también fueron trasladados los demás conceptos que en su momento dispuso el Juez de primera instancia como las cuotas de administración, porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima o porcentajes de seguros y reaseguros.

Adicionalmente, hasta ahora COLPENSIONES y muy a pesar de habersele puesto en conocimiento cada una de las respuestas recibidas, no ha desistido de su intención de solicitar la nulidad del proceso siendo la parte agraviada con la decisión, de manera que debe impartirse el trámite correspondiente y decidir de fondo el recurso que nos convoca.

Así entonces, el cuestionamiento que hace COLPENSIONES a través de su solicitud de nulidad y en el que insiste en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, radica en el hecho de que, a su juicio, no tuvo la oportunidad para presentar los alegatos de conclusión ni sustentar el recurso de apelación en contra de la decisión que en primera instancia se adoptó. Fundamento que está legalmente consagrado en el numeral 6º del art. 133 del Código General del Proceso, que dispone:

**“Artículo 133.** *El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

(...)

*6°. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.”*

De otro lado, según la solicitud que hace el señor Procurador para asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que se presenta es una nulidad constitucional por violación al derecho de defensa y al debido proceso según lo regulado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que dispone:

*“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”*

La situación que se vislumbra en este caso no es tanto como una nulidad por omitirse la oportunidad para alegar de conclusión o para presentar el respectivo recurso de apelación, pues lo que ocurrió fue que la apoderada de COLPENSIONES no pudo asistir a la diligencia respectiva, lo que obedeció a que para esa fecha estaba médicamente incapacitada según se aprecia a folios 162 del expediente.

Aunque esa situación por sí sola no daría lugar a declarar la nulidad que se reclama, lo que sí resulta evidente es la vulneración al debido proceso en que incurrió el Juez de primera instancia al adoptar una decisión de esas características, desconociendo la noción de lo que debe entenderse por parte procesal, que ha sido determinada en este caso desde el acto de la demanda al dirigirse la acción en contra de ambas entidades mencionadas, una, para que corra con las consecuencias de una posible ineficacia del traslado de régimen pensional, otra, para que asuma la re afiliación del demandante y eventualmente el reconocimiento de su derecho pensional, lo que las hace parte en la Litis, con independencia de que COLPENSIONES no

haya participado en acto del traslado del RPM al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Según el escrito de demanda, la señora SOL EUGENIA CORRALES CAMPUZANO pretende que se declare la nulidad o ineficacia de su traslado de régimen efectuado el 12 de septiembre de 1995 cuando decidió trasladarse desde el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a la AFP PROTECCIÓN S.A., fundamentando en el hecho de no haber recibido una oportuna y completa información de esta última entidad. Adicionalmente, pretende que se declare que siempre ha permanecido afiliado al Régimen de Prima Media y que se le ordene a PROTECCIÓN devolver todos los aportes recibidos con ocasión de esa afiliación.

Así se admitió la demanda en contra de ambas entidades según auto del 18 de marzo de 2019, fls. 34, lo que implica sin duda que se trata de un proceso cuya parte pasiva o parte demandada la componen dos entidades, COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., siendo precisamente por esa condición que allegaron al proceso su respectiva contestación a la demanda en ejercicio de su derecho de defensa.

Ahora bien; ya en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, en esa primera etapa de la diligencia, la de conciliación, ante la manifestación de voluntad de un acuerdo expresada por PROTECCIÓN S.A., el Juez de Primera Instancia dispuso proceder con su aceptación, impartiendo una serie de órdenes como si de una sentencia condenatoria se tratara, no solo al fondo privado PROTECCIÓN S.A., sino también a la ACP COLPENSIONES, incluso disponiendo la terminación y archivo del proceso

Se ha entendido la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el que **las partes**, con la mediación de un



tercero llegan a un acuerdo, evitando así el trámite de un proceso judicial.

Si bien la conciliación está concebida como una alternativa para la descongestión, no puede perderse de vista que el legislador ha sido celoso en su regulación, siendo más exigente para entidades de derecho público como lo es COLPENSIONES. Es así como la Ley 23 de 1991 previó que sería efectuada por sus representantes legales, con la idea de tener un direccionamiento estratégico para la defensa jurídica de los intereses de la entidad, del Estado y del patrimonio de los ciudadanos.

Luego se expidió la Ley 446 de 1998 en cuyo artículo 75 se adicionó el artículo 65 B a aquella ley 23 y que tuvo por objeto la creación del comité de conciliación, entre otras, en las entidades y organismos de derecho público de orden nacional. A su turno, el Decreto Reglamentario 1716 de 2009 en su artículo 16, definió la naturaleza jurídica del Comité de Conciliación como una instancia administrativa de decisión y en su artículo 17 dispuso expresamente sobre su integración, norma que fue incorporada en el artículo 2.2.4.3.1.2.3. del Decreto 1069 de 2015, el cual a su vez fue modificado por el artículo 2 del Decreto 1167 de 2016 al señalar que las entidades públicas del orden nacional pueden invitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a participar en las respectivas sesiones, a efectos de lo cual tendrá derecho a voz y a voto.

COLPENSIONES no ha sido ajena a la aplicación de esta normatividad y es por eso que tiene conformado el respectivo comité de conciliación y defensa judicial, llevándose a su consideración todos los asuntos objeto de debate ante la justicia ordinaria laboral y allegándose el correspondiente concepto de la Secretaría Técnica de este órgano antes de la celebración de la audiencia regulada en el artículo 77 del C. P. T. y de la S.S.

El presente asunto también fue objeto de ese estudio y fue así como se expidió la certificación 177562019 que da cuenta del acta N°117-2019 del 27 de junio de 2019 en la que se dispuso expresamente lo siguiente: *“NO proponer formula conciliatoria”*, explicando en los párrafos siguientes las razones para su decisión. Fls. 166 a 168.

En esas condiciones, no podía el juez de primer grado pasar por alto tal información que había sido allegada oportunamente al expediente, olvidándose que COLPENSIONES también es parte dentro del proceso y cualquier decisión que se adopte le va a generar consecuencias jurídicas, económicas y presupuestales.

De otro lado, no es admisible el argumento según el cual la conciliación sí es posible gracias a que COLPENSIONES no hizo parte en el acto jurídico de traslado, pues resulta indiscutible que la conciliación judicial debe contar, como lo puso de presente el señor Procurador para asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, con la aquiescencia de todos los sujetos que conforman la parte pasiva, como lo son en este caso COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.

Así las cosas, al desconocerse una exigencia de ley, como lo es el concepto negativo del comité de conciliación y defensa judicial de la entidad pública, el acuerdo conciliatorio aprobado por el a quo carece de efecto alguno, debiéndose rehacer la actuación desde tal etapa procesal, en aras de la garantía al debido proceso prevista en el artículo 29 Superior.

Sin costas en esta instancia.

### **DECISIÓN:**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECRETA la NULIDAD** de lo

actuado a partir de la audiencia llevada a cabo el 19 de septiembre de 2019, ordenándose rehacer la actuación teniendo en cuenta la calidad de **parte** dentro del proceso de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. En constancia se firma.

**Los Magistrados,**

  
JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

  
FRANCISCO ARANGO TORRES

  
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 061  
del 14 de abril de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>